**COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ENCARGADA DE DETERMINAR
LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y POLÍTICA DEL SENAME**

**Sesión 12ª, ordinaria, correspondiente a la 356ª legislatura, celebrada el
día miércoles 9 de julio de 2008.**

Se abre la sesión a las 11:09 horas.

SUMARIO

- Se recibió a la Defensora Nacional, quien entregó antecedentes relativos a los hechos que son objeto de la investigación.

1.- ASISTENCIA.

Asistieron las Diputadas señoras Marisol Turres Figueroa (Presidenta), María Antonieta Saa Díaz y Ximena Valcarce Becerra, y los Diputados señores Marcelo Díaz Díaz, Edmundo Eluchans Urenda, Tucapel Jiménez Fuentes, Carlos Recondo Lavanderos, Alejandro Sule Fernández y Patricio Vallespín López.

En calidad de invitados asistieron la Defensora Nacional, señora Paula Vial Reynal, y el Jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil, señor Gonzalo Berríos Díaz.

* * * * *

2.- ACTAS.

El acta de la sesión N° 10 se declaró aprobada por no haber sido objeto de observaciones.

El acta de la sesión N° 11 quedó a disposición de las señoras y señores Diputados.

* * * * *

3.- CUENTA.

La señora Secretaria de la Comisión informó que se había recibido el siguiente documento:

1.- Una carta enviada por el Representante de UNICEF para Chile, señor Egidio Crotti, en que excusa su participación en esta sesión, por estimar que a un organismo internacional no le corresponde intervenir ante una Comisión que investiga responsabilidades políticas y

administrativas por la muerte de 10 menores en el centro “Tiempo de Crecer” de Puerto Montt, sin perjuicio de manifestar su más amplia disposición a colaborar con iniciativas que tiendan a perfeccionar el sistema legal vigente y su implementación en el país.

* * * * *

4.- ORDEN DEL DÍA.

Se escuchó la exposición de la Defensora Nacional, quien se refirió a los hechos materia de la investigación.

Las exposiciones realizadas durante la discusión de los puntos en tabla y el debate suscitado en torno a éstos se encuentran archivados en un registro de audio que queda a disposición de los señores Diputados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 249 del reglamento de la Cámara de Diputados.

Del mismo modo, se adjunta a esta acta la versión taquigráfica de lo tratado en la sesión, realizada por la Redacción de Sesiones de la Cámara de Diputados.

* * * * *

Habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, se levantó a las 12:25 horas.

MARISOL TURRE FIGUEROA
Presidenta de la Comisión

MARÍA EUGENIA SILVA FERRER
Secretaria Abogado de la Comisión

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Preside la diputada señora Marisol Turres.

Asisten las diputadas señoras María Antonieta Saa y Ximena Valcarce y los diputados señores Marcelo Díaz, Edmundo Eluchans, Tucapel Jiménez, Carlos Recondo, Alejandro Sule y Patricio Vallespín.

Además, concurren como invitados la señora Paula Vial, defensora Nacional Pública, y el señor Gonzalo Berríos, jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Penal Pública.

TEXTO DEL DEBATE

La señora TURRES, doña Marisol (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

El acta de la sesión 10ª se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones.

El acta de la sesión 11ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.

La señora Secretaria va a dar lectura a la Cuenta.

-La señora SILVA, doña María Eugenia (Secretaria) da lectura a la Cuenta.

La señora TURRES, doña Marisol (Presidenta).-
Una de las personas invitadas a esta sesión era el representante de la Unicef, señor Egidio Crotti, quien se ha excusado de asistir.

No obstante, vamos a recibir a la recién nombrada defensora Nacional Pública, señora Paula Vial, y al señor Gonzalo Berríos, jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil.

Por favor, que ingresen los invitados.

-Ingresan los invitados a la Sala de la Comisión.

La señora TURRES, doña Marisol (Presidenta).- En nombre de la Comisión, les doy la bienvenida y aprovecho la ocasión de desearle suerte a la señora Paula Vial en los nuevos desafíos que deberá enfrentar como defensora nacional pública. Esperamos con ansias que su nombramiento signifique una mejora en la situación de los menores infractores de ley. Muchos de ellos se encuentran viviendo una realidad bastante dramática y, ojalá, que lo que le corresponda hacer en la Defensoría sea lo mejor para ellos y para nuestro país.

Tiene la palabra la señora Paula Vial.

La señora VIAL (doña Paula).- Agradezco los buenos deseos y comparto plenamente la preocupación por los jóvenes. En términos institucionales, nuestra dedicación será tal cual lo hemos hecho hasta ahora.

Asimismo, deseo señalar que, en lo que corresponde a la Defensoría Penal Pública, desde el inicio adoptamos la decisión institucional de establecer un sistema de defensa especializada. En la práctica, significó dotar a la Defensoría de un equipo profesional de defensores penales públicos especializados en defensa juvenil, asistentes sociales que complementarían esos equipos y asistentes administrativos.

Se implementó un proyecto piloto de defensa penal juvenil y se contrataron 40 defensores juveniles, distribuidos a lo largo del país, a fin de que se especializaran en esa materia.

La labor fundamental de los defensores juveniles, así lo han hecho desde el inicio, es desarrollar una defensa especializada entregando

elementos específicos que digan relación con el sujeto particular de atención en tribunales y, por lo tanto, que no sólo permitiera desarrollar una mejor defensa sino que, además, diera cumplimiento al requisito establecido en la ley, que todos los operadores en el sistema de justicia especializada tengan esa característica.

Establecimos un proyecto piloto que ha funcionado de manera muy eficiente y se complementó la selección específica con un sistema de concurso público en el que se eligió abogados que tuvieran alguna experiencia o capacidad especial en materia de defensa juvenil. Posteriormente, se realizaron procesos de especialización y capacitación de los mismos.

Como una forma de complementar la realidad, los 40 abogados no iban a ser suficientes para las necesidades del país por razones geográficas, de distribución y otros; se estableció un programa complementario de capacitación para defensores dedicados a la defensa de adultos y a profesionales de apoyo para que también pudieran cubrir las necesidades de especialización en aquellos casos en que los defensores juveniles no pudieran cumplir con su función.

Insisto en que básicamente es por razones geográficas, por dotación es imposible contar con un defensor juvenil especializado; razones de turnos, ya que no pueden cumplir jornadas de 365 días.

Entonces, se estableció un sistema de priorización de defensa juvenil por parte de ese equipo especializado y de apoyo con funcionarios de la defensoría a quienes también se les entregó la capacitación adecuada.

Junto con establecer ese equipo especializado se entregaron herramientas que perfeccionaran las tareas

que debían hacer; se realizaron dos programas nacionales de capacitación en una nueva justicia penal adolescente.

En 2006, de manera previa a la postergación de la entrada en vigencia de la ley, se realizaron actividades de capacitación presencial a los 40 defensores penales juveniles ya elegidos y que comprendió 311 horas cronológicas. Además, 72 horas de contenidos propios relativos al nuevo sistema penal adolescente.

Tengo en mi poder el programa, pero básicamente lo que quiero señalar es que se reforzó con casi 400 horas de capacitación a funcionarios que ya habían sido elegidos por sus características especiales, porque habían trabajado en programas de defensa juvenil o porque tenían capacitación o diplomados de otro corte académico en materias juveniles.

Los contenidos de esa capacitación atendieron a entregarles herramientas jurídicas y sicosociales que permitieran desarrollar de la mejor forma posible la defensa jurídica de los menores, no sólo en tribunales sino también en todas las otras actividades que supone el ejercicio de la defensa de adolescentes. Básicamente, entrevistas con los adolescentes y relación y forma de trato con sus familiares. No es lo mismo, y lo hemos visto en la práctica por los buenos resultados que hemos obtenido, atender a un adulto que a un menor. Tampoco es lo mismo atender a la familia del menor que a los parientes de algún imputado adulto. El nivel de preocupación es mucho mayor, la necesidad de información de los propios menores es mayor, la capacidad de retención y de comprensión es distinta.

Entonces, lo que se hizo en los procesos de capacitación fue entregarles herramientas a los defensores y a los asistentes sociales que los acompañan

en su trabajo y que constituyen un elemento fundamental en la labor que realizan los equipos juveniles, y con ello desarrollar adecuadamente las funciones de defensa juvenil.

Sólo por poner un ejemplo de lo específica que fue la formación, puedo contarles que dentro de la capacitación hubo talleres de cultura juvenil, de habilidades de comunicación con adolescentes y sus familias, de trabajo de redes sociales, etcétera.

Además, se trabajó en conjunto con profesionales del Departamento de Derechos y Responsabilidad Juvenil del Sename, presentando orientaciones técnicas de las funciones previstas en la ley para que, de ese modo, hubiera coordinación entre equipos juveniles y profesionales de dicha institución, y para que los defensores conocieran las orientaciones que el Sename pretendía aplicar a la imposición de sanciones por parte de los tribunales de justicia.

Como señalé, los 40 defensores no dan abasto en términos territoriales, lo que, además, tiene que ver con razones presupuestarias. Idealmente, podríamos tener una dotación mayor de defensores juveniles, pero frente a la realidad de que con aquellos no iba a ser suficiente se estableció un sistema de capacitación para todo el resto, de modo que si en alguna eventualidad, en algunos casos de manera permanente, fuera necesario que adoptaran medidas jurídicas respecto de los menores como, por ejemplo, tomar audiencias de control de detención o, incluso, seguir adelante con la defensa para que pudieran tener también destrezas y conocimientos específicos respecto de la nueva ley que, obviamente, no todos manejaban.

Para ello se hizo una capacitación vía E-Learning obligatoria para los 145 defensores institucionales, la que se extendió a defensores licitados y por convenio. De esa manera, se alcanzó a un total de 218 defensores licitados que, como ustedes saben, es la otra modalidad de la Defensoría Penal Pública y que no atiende causas juveniles. Pero, en algunos lugares hemos hecho excepciones.

Además, hubo profesionales de apoyo, 61 de la Defensoría y 62 que, incluso, invitamos de otras instituciones aprovechando que se trataba de una herramienta de fácil difusión, en la que el aumentar la capacidad no tenía costo adicional. Por esa razón invitamos a jueces, carabineros y funcionarios del Ministerio de Justicia. Esa fue una capacitación que, como todos los cursos de E-Learning, dependió mucho del propio capacitado. Por esa razón establecimos un sistema de evaluación que permitiera detectar si, efectivamente, los conocimientos habían sido bien adquiridos por parte de los usuarios de la capacitación.

En definitiva, lo que allí se hizo fue entregar información de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente y sobre los otros aspectos que señalé. Fue una capacitación de 15 horas vía electrónica, muy concentrada, en la que se desarrollaron módulos relativos a tratados y derecho internacional. Por ejemplo, cómo aquella legislación se incorporó a la nuestra, cómo impacta en la forma de realizar la defensa y en los derechos y garantías que tienen los jóvenes infractores.

En 2006 se capacitó a 418 abogados de la Defensoría Penal Pública. Pero a raíz de que la entrada en vigencia de la ley se retrasó y como el equipo juvenil ya estaba elegido y capacitado se optó por trabajar con ellos, lo que también constituyó para nosotros, visto

desde el punto de vista positivo, una oportunidad. Esos 40 abogados y sus equipos de asistentes sociales -que constituyen un elemento fundamental, particularmente por la capacidad que tienen de generar redes de coordinación con el Sename y sus organismos colaboradores, con la sociedad en general y las familias de los menores- se dedicaron durante ese año de retraso a la defensa de jóvenes y con el sistema antiguo.

Lo que en esa oportunidad se hizo fue tomar audiencias con jóvenes imputados. Esa tarea suponía la participación y decisión en la argumentación para efectos del trámite del discernimiento. Luego, si éste se había declarado, la defensa juvenil.

Por lo tanto, lo que obtuvimos fue un equipo muy profesional y capacitado que tuvo la oportunidad de estar durante un año desarrollando destrezas y habilidades de litigación. Además, conociendo el sistema en cada una de sus regiones, por ejemplo, a operadores, contrapartes del Ministerio Público y del Sename, como así también, distintos programas existentes.

Asimismo, como ustedes saben, en muchos casos la misma oferta programática que el Sename tenía para llevar adelante algunas de las medidas cautelares y otros sistemas de sanciones, justamente por su experticia, son quienes están a cargo de las sanciones de libertad asistida especial, desarrollo de trabajos comunitarios, etcétera. Aquella se trató de una experiencia en la que se pudieron profundizar lazos y establecer relaciones con actuales operadores y, por lo tanto, potenciar el trabajo de los defensores y la posibilidad de establecer alianzas para efectos de buscar una propuesta de mejor sanción en el caso de que, efectivamente, se decidiese condenar a los menores.

Durante 2007 se decidió ejecutar un segundo plan de capacitaciones, pese a que ya se había realizado el que señalé, que tuvo por objeto la actualización y profundización de los conceptos desarrollados durante 2006. A éste también asistieron los mismos 40 defensores juveniles y se aumentó además a 20 profesionales con la idea de tener gente de reemplazo y refuerzo en cada una de las regiones. Ese curso duró 72 horas e incluyó en su programa de formación aspectos como, por ejemplo, la psicología del desarrollo del adolescente y otros que, aparte de ser muy interesantes, son relevantes a la hora de decidir la responsabilidad penal de los menores, ya que el desarrollo evolutivo y cognitivo de los menores es muy diferente cuando alcanzan la madurez, lo que, obviamente, pasa a ser un elemento que nos permite, en la medida que lo manejemos, entregar a los jueces un factor que puede ser determinante para efectos de su decisión.

Allí se incorporó nuevamente elementos de derecho internacional que, en el caso de los menores, tiene mucha relevancia por la importancia de los tratados en materia de responsabilidad juvenil.

Hubo un segundo curso de E-Learning, también con la idea de profundizar, pero en este caso se aumentaron las horas, ya que el primero tuvo 15 horas pedagógicas y éste 21. Participaron todos los defensores institucionales, 199 licitados y 51 profesionales de otras áreas de la Defensoría Penal Pública.

La mayoría de ellos eran abogados, pero también se potenció a unidades de gestión para el trato de atención de imputados los que, generalmente, son asistentes sociales que realizan una labor colaborativa, por lo que se potenció entregarles aspectos de materias juveniles que no necesariamente podían manejar.

En 2007 se capacitó a 407 defensores en total. Al 8 de junio del mismo año los defensores penales públicos se encontraban en óptimas condiciones para asumir su responsabilidad en la puesta en marcha de la nueva defensa juvenil.

En 2008 se ejecutará un nuevo proceso que está dentro del plan de capacitación anual de la Defensoría Penal Pública. En él se incluyó materia juvenil, se priorizó la actualización y profundización de cuestiones que tuvieran relación con la interpretación de la jurisprudencia que se ha desarrollado en los distintos tribunales del país, lo que permitirá entregar a los defensores nuevas argumentaciones en la ejecución de la defensa juvenil.

La señora TURRES, doña Marisol (Presidenta).- Quiero orientarla un poco hacia dónde va nuestro lado investigativo. Además, el por qué acordamos que concurriera la Defensoría Penal Pública fue para saber, más allá de la teoría, cómo se ha puesto en marcha esto; de qué manera se relacionan con los menores, quién determina y quién controla el cumplimiento de los objetivos; en el fondo, cómo se hace la pega.

La señora VIAL (doña Paula).- En ese sentido, es necesario apoyar el trabajo en estadísticas, porque me parece sumamente relevante; sin embargo, la estructura tiene que ver con este equipo especializado que he señalado.

Existe una unidad de defensa juvenil que está a cargo del abogado Gonzalo Berríos -aquí presente-, quien cuenta con un equipo en la Defensoría Nacional en Santiago, y que además se encarga de la estructuración, fortalecimiento, entrega de insumos, análisis de

jurisprudencia, informes en derecho, minutas de actualización, etcétera.

Cada uno de los defensores juveniles de este equipo de 40 -que hoy ha aumentado a 42 y estamos haciendo una solicitud para ampliar a 5 ó 6 defensores más en la Región Metropolitana- se distribuyó en las distintas regiones del país, de acuerdo a las proyecciones de necesidades de defensa juvenil, y que según las estadísticas con las que contábamos, las que suponían única y exclusivamente el tramo entre los 16 y 18 años.

En términos prácticos, no ha aumentado de manera relevante -en algunas regiones incluso ha disminuido- el total de causas respecto del universo general de defensa que nosotros entregamos. Sigue rondando el 10 por ciento del total de ingresos para la Defensoría.

En el tramo entre 14 y 16 años, que de alguna manera es el tramo nuevo, éste corresponde aproximadamente al 25 por ciento de los ingresos de la Defensoría para efectos de defensa.

Estos defensores están distribuidos a lo largo del país, según estas necesidades y, obviamente en las regiones más grandes, como la Metropolitana, Octava y Quinta -en ese orden en términos de ingreso- tienen dotaciones mayores. Ellos trabajan en relación directa con el defensor regional respectivo, quien es el que hace la distribución dentro de cada región respecto de la forma de asumir los turnos y los tribunales a cargo de cada uno de los defensores. Además tienen una relación de apoyo académico, jurisprudencial y, en algunos casos, hasta logística de la Unidad de Defensa Juvenil. Es decir, existe un contacto permanente entre el equipo de

defensores juveniles, sus equipos de asistentes sociales, la unidad de defensa juvenil y los respectivos defensores regionales.

Cada defensor regional ha hecho la distribución de estos recursos de acuerdo a su propia distribución geográfica. Por ejemplo, hasta hace muy pocos días era asesora regional de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins. Ahí tenemos tres defensores juveniles y cada uno de ellos está asignado a una ciudad en particular y a un tribunal asociado y, con sede en ese lugar, trabajan dentro de las defensorías y atienden las causas de menores de los tribunales de las zonas respectivas.

La distribución de ingresos también es relativa. Por ejemplo, en el caso de Rancagua, que es la capital de la región, y en que obviamente se supone un mayor ingreso que el resto, se puede decir que los otros defensores también atienden más de un tribunal.

La forma en que ellos atienden la defensa supone que están de lunes a viernes permanentemente de turno, por lo tanto, todos los menores que en general llegan a control de detención -insisto en que cada región tiene delegada alguna autonomía en términos de cómo estructura- son atendidos por defensores juveniles, con los que se asegura que esa primera atención sea también especializada.

Cuando aquello es imposible, por coincidencias de audiencias, por un tema geográfico o porque se trata de turnos de fin de semana -a pesar de que los defensores juveniles también cubren turnos eventualmente-, lo asumen aquellos defensores que han sido especializados a menor escala.

Durante toda la primera etapa, desde que se inició la puesta en marcha de la ley, los defensores

juveniles estuvieron atentos, particularmente en el caso de los fines de semana, a un apoyo más bien telefónico y en algunos casos hasta presencial, para los defensores de adultos que estuvieran a cargo cuando eventualmente tuvieran algún control de detención que supusiera la defensa de algún menor.

Una vez hecha esta primera atención son los defensores juveniles quienes prioritariamente se han hecho cargo de las causas.

Por lo tanto, en términos genéricos, podemos decir que más del 62 por ciento de los menores atendidos lo ha sido con defensa especializada. El resto del porcentaje -resulta majadero señalarlo- tiene que ver con los factores previamente señalados, por ejemplo, distribución geográfica.

Durante el año de implementación de la reforma hemos atendido a 27.882 jóvenes adolescentes; lo que significa el 10,4 por ciento del total de imputados atendidos por la Defensoría.

Existe una diferencia respecto del año anterior, en términos de cantidad de jóvenes atendidos. Se aumentó a 4.350 la cantidad de atenciones. Mayoritariamente, el 87 por ciento corresponde a hombres, jóvenes adolescentes y, como dije antes, el 25 por ciento de aquellos corresponden al tramo entre 14 y 16 años, que es el más nuevo y también el más complejo.

Cada tramo tiene su particularidad. Entre los 14 y 16 años son más vulnerables; entre los 16 y 18 años las exigencias son más complejas en términos del tipo de delito. Por lo tanto, hemos intentado atender de la manera más adecuada cada una de esas particularidades.

El 72 por ciento de las causas, atendidas por la defensoría, están terminadas. Las formas de término

que se han utilizado principalmente son las salidas alternativas que contempla la legislación general; no así la ley N° 20.084, como la suspensión condicional del procedimiento en un porcentaje muchísimo mayor -91,3 por ciento- a aquel que se da respecto de los adultos. Es decir, las salidas alternativas corresponden al 44 por ciento del tipo de término de causa de los jóvenes y, de ella, un 91 por ciento corresponde a suspensión condicional.

La segunda alternativa es el acuerdo reparatorio, principalmente económico, el que obviamente, en el caso de los jóvenes, es muy difícil de aplicar.

En el 34 por ciento de los casos, los términos han correspondido a condena. El 10 por ciento corresponde a facultativas del Ministerio Público, de aplicación del principio de oportunidad, archivo, etcétera. El 5 por ciento, aproximadamente, ha correspondido a sobreseimiento.

Respecto de las sanciones aplicadas, casi la mitad de ellas corresponden a amonestación y servicio en beneficio de la comunidad.

¿Por qué los agrupo? Porque la aplicación de estas sanciones no sólo tiene que ver con las decisiones del tribunal, sino también con los tipos de delito que son investigados por la Fiscalía, judicializados y llevados ante los tribunales.

La amonestación es una sanción que corresponde al 18,4 por ciento, que sólo se aplica respecto de la falta, por lo tanto, hablamos de una "delincuencia" de escasísima relevancia.

En el caso del servicio en beneficio de la comunidad, correspondiente al 29,2 por ciento, también se

puede aplicar como una sanción respecto de delitos de menor entidad.

Las sanciones de libertad asistida y de libertad asistida especial también tienen cierta relevancia. Diría, desde el punto de vista de la defensoría, que son sanciones que han tenido buenos resultados, por cuanto privilegian aquello que está establecido en la ley: el cumplimiento de sanciones de los menores en libertad. Los programas consideran un plan de intervención y mejores capacidades para atender a las finalidades de la ley con los menores en libertad. En ese sentido, los resultados han sido muy positivos. Por lo tanto, la tendencia -tal como lo señala la ley- debiera ser a tratar de priorizar las sanciones en libertad. En el caso de la libertad asistida, tenemos un 14,7 por ciento y, en el de la asistida especial, un 21,7 por ciento. En total, son tres mil los jóvenes a quienes se les ha aplicado este tipo de sanción.

El internamiento de jóvenes en centros semicerrados es de un 5 por ciento, que corresponde a 421 jóvenes; el internamiento en los centros cerrados alcanza a un 3,1 por ciento, que equivale a 264 jóvenes.

La sanción mixta que establece la ley, básicamente en el tratamiento de drogas, se ha aplicado a un 1,1 por ciento, lo que supone 92 casos. En ese porcentaje son sumamente relevantes las características del infractor y de la sanción. Obviamente, resulta poco conveniente aplicar la sanción mixta en aquellos casos en que la propia sanción vaya a durar menos del tiempo que, médicamente, está recomendado para obtener un resultado positivo en la aplicación de un tratamiento contra las adicciones.

En general, el rol de la defensa, en relación con las condiciones de privación de libertad y los programas de reinserción de los jóvenes, lo podemos distinguir entre el defensor y la defensoría como institución. El defensor juvenil es el abogado del menor, quien genera una relación de confianza con el joven infractor, que supone, incluso, a nivel legal, el respeto de la autonomía en el rol que le corresponde cumplir, sin perjuicio de ciertos lineamientos genéricos que es necesario establecer y controlar. Pero, básicamente, se privilegia esa relación de confianza entre el abogado y su cliente, aun cuando se trate de un adolescente, de un joven o de un menor. El defensor tiene la obligación de ejercer todos los derechos que le asistan a su representado, prioritariamente. Es decir, su relación, su deber y su responsabilidad es para con él, como cualquier abogado privado respecto de un cliente que le pague. En este caso, además, se agrega el hecho de que se trata de abogados que se han especializado en estas materias, por ejemplo, cautela de garantías, amparo constitucional, recurso de protección, amparo ante el juez de garantía, amparo de derechos del condenado. Todo ello está establecido en la ley, en el Código Procesal Penal y en la Constitución. En todos los casos en que el defensor - siempre asesorado por el equipo juvenil y por la institución- estime que es necesario realizar algún resguardo particular de las condiciones o garantías del menor, será él quien deba llevarlo adelante.

Los abogados y los defensores han sido capacitados en esos mecanismos y -como he dicho antes- su decisión y su articulación queda en manos del propio abogado, por respeto de su autonomía establecida a nivel legal, que supone que ni el defensor regional, ni el defensor nacional ni el equipo juvenil pueden tener

injerencia en las decisiones jurídicas que el imputado y su defensor adopten en conjunto. Lo que la defensoría sí puede hacer, y que realiza tanto a través de la Unidad de Defensa Juvenil como de las propias defensorías regionales y de nuestros mecanismos de controles genéricos, como inspectorías y auditorías internas, es controlar que se cumpla adecuadamente con los estándares y con las obligaciones que le corresponden a cada defensor. La autonomía no supone que uno deje todo entregado al defensor, y que si éste es ineficiente o no cumple con sus labores, eso no tenga impacto. Son autónomos en sus decisiones, informan al menor de las distintas alternativas, de cuáles son sus derechos y garantías, de cuáles son las distintas salidas de que dispone y en conjunto elaboran la estrategia jurídico penal acorde con la situación del mismo.

Por su parte, la Defensoría Penal Pública, como institución, participa a través de un representante en las comisiones regionales de supervisión de los centros del Sename y las secciones juveniles de Gendarmería, junto con Unicef y otros organismos establecidos en la ley. Estas comisiones tienen por objeto visitar los centros y revisar, al menos dos veces en el año, las condiciones de los mismos. Esta materia se ha cumplido. Nuestros profesionales integraron esas comisiones, sin perjuicio de la revisión institucional que -sin este carácter legal- realizamos permanentemente en relación con el trabajo y el apoyo que se presta a los defensores. En ese sentido, quiero resaltar el trabajo en equipo de la defensa juvenil especializada que realizan los asistentes sociales juveniles, quienes fueron elegidos por sus particulares características: experiencia o capacitación en materia de gestión de jóvenes. Tenemos asistentes sociales juveniles en cada una de las regiones

y su labor es servir de nexo y, de alguna manera, de intérpretes entre los jóvenes y los defensores, sin perjuicio de la capacitación que tienen jurídica y psicosocialmente. Por lo tanto, los asistentes sociales son un factor muy importante de contención, coordinación y nexo con los jóvenes. Los adolescentes no son clientes fijos, sino que tienen otras características, necesidades y urgencias, lo que supone que haya que tener con ellos cuidados muy especiales. En ese sentido, los asistentes sociales que están trabajando en esos equipos juveniles realizan de manera muy adecuada esta labor, pues - reitero- sirven de nexo con los jóvenes para atender sus necesidades y para contener muchas de sus expectativas y frustraciones. Además, su labor es sumamente relevante en relación con el trabajo que realizan los defensores, porque, aun cuando éste se restringe legalmente a la defensa jurídica, no podemos desatender las características del sujeto de atención y su entorno. Por eso, el elemento profesional que constituyen los asistentes sociales nos ha servido mucho.

A partir de algunos problemas detectados en el año de ejecución de la puesta en práctica de la ley, y, por lo tanto, de la materialización de la defensa especializada tenemos algunos desafíos e ideas para mejorar el sistema en términos de lo que está ocurriendo realmente. Creemos firmemente que es imprescindible el fortalecimiento de la especialización de los jueces, fiscales y defensores. Sin miedo a equivocarme, puedo decir que en aquellos casos en que los defensores especializados han participado en la defensa de los menores, los resultados han sido necesariamente mejores. Cuando digo mejores, no me refiero a obtener absoluciones con víctimas que quedan insatisfechas, sino que me refiero a la mejor salida para el menor infractor, si es

considerado culpable. A través de esta especialización el defensor aporta elementos para la decisión del tribunal, que tienen que ver con las características particulares del menor. Entonces, a pesar de que la ley lo señala de una manera poco afirmativa, nos parece imprescindible el fortalecimiento de la especialización. Es necesario que quienes intervengan en la justicia adolescente cuenten con los conocimientos y especialización al respecto.

La idea es reorientar la ley hacia la reinserción social más que al castigo producto de un delito. Existe un desequilibrio a favor de la sanción más que de la rehabilitación. Por eso, pese a que constituye el porcentaje menor, porque tiene que ver con el tipo de delitos cometidos, en muchos casos se ha privilegiado la sanción privativa de libertad, pese a que la ley establece prioritariamente, como un mandato, que se debe dejar como excepción sólo para aquellos casos en que sea imprescindible. La lógica de la ley -perdonen que trate de ser pedagógica; sé que ustedes conocen este tema mejor que yo- es establecer una justicia especializada, no una justicia de adultos atenuada. En la medida en que esto se logre comprender, es evidente que el tipo de sanciones, en los casos que corresponda, será el más adecuado, en miras del objetivo rehabilitador. Es decir, no se pueden aplicar los mismos criterios que se utilizan para la justicia de adultos, sólo estableciendo atenuantes porque se trata de adolescentes. El criterio y el punto de partida deben ser diferentes para los jóvenes.

Ahora bien, es necesario priorizar los acuerdos reparatorios, que no necesariamente implican el pago de cantidades de dinero. En la práctica muchos casos se han entendido y se han aplicado así, lo que ha supuesto que se pueden aplicar en menor escala. Pero es posible ser mucho más creativo. Respecto de los jóvenes ese esfuerzo

se justifica aún mucho más en términos de cuál puede ser la mejor sanción. Ése es un esfuerzo que todos los operadores y quienes intervenimos debemos privilegiar. Las instrucciones para nuestros defensores, sin afectar su autonomía, son tratar de priorizar la búsqueda de acuerdos con el Ministerio Público y proponer a los tribunales salidas creativas en los casos en que haya responsabilidad de los menores.

Por otra parte, me parece sumamente prioritario restringir y controlar el uso de la privación de libertad. Desafortunadamente, pese a que la propia ley, haciéndose eco de tratados internacionales que protegen los derechos de los menores, establece la restricción de libertad como una excepción sólo para aquellos casos en que ninguna de las otras alternativas ha sido suficiente, en la práctica eso no ha operado de la misma manera. En la actualidad tenemos un número muy importante de menores sujetos a internación provisoria -que es un eufemismo, porque se trata de la prisión preventiva- y un número alto de menores condenados a penas privativas de libertad. Tratando de empatizar con una lógica de opinión pública, 5 ó 10 años de prisión pueden parecer poco, pero desde la perspectiva del menor es una vida. Básicamente, debemos entender que en el conjunto de la interpretación de la ley no sólo se debe restringir el uso de las penas privativas de libertad, sino que, además, su duración en el caso de que se apliquen.

Respecto de las detenciones, hay propuestas que son positivas para efectos de la aplicación del sistema, por ejemplo, la obligatoriedad del aviso al defensor y a la familia. El fiscal debería decidir la puesta en libertad o no en un plazo menor a las doce horas que rige para el adulto. Ése es el plazo con que cuenta el fiscal, cuando se produce la detención de un adulto, para decidir

si lo va a pasar a control de detención. Si bien se sigue en el mismo ámbito de las 24 horas para que se realice el control de detención, el fiscal cuenta con doce horas para reflexionar y para obtener antecedentes, de modo de decidir si va realizar o no dicho control. Respecto de los menores, creemos que ese plazo es excesivo. En ciertos casos se utiliza como medida de presión, aun cuando transcurridas las doce horas se deja en libertad al menor. Por lo tanto, debe reducirse a un plazo, por ejemplo, de seis horas.

Además, se deben establecer mecanismos efectivos para la denuncia de abusos. Cuando se producen las detenciones, no se excede en el plazo y se deja en libertad a los menores, muchas veces logramos detectar, sólo de manera casual, que hubo abusos, porque no hay mecanismos adecuados para detectarlos. Si el menor llega al control de detención se facilita esa función, porque podemos ver si está golpeado, si presenta lesiones o si él mismo nos relata que ha sufrido abusos. En ese caso, lo patentamos en el tribunal y ejercemos los derechos que le corresponden al menor. El tribunal decide. Pero aquellos casos de detenciones en los que se produce esta situación -que no es menor- constituyen un terreno ambiguo, en el que los menores no cuentan con una protección adecuada. Por tanto, se pueden producir abusos si no existen mecanismos adecuados para detectarlos.

Asimismo, debe regularse expresamente que una detención puede ser declarada ilegal si se presentan violaciones de derechos durante la misma, como abusos a los menores. Hay algunas situaciones que fluyen de la legislación general; respecto de ellas son las alegaciones que los defensores realizan. Cuando hay abusos se solicita que la detención sea declarada ilegal. No obstante, es facultativo revisarlo o no, dependiendo

de la entidad, del criterio y de los antecedentes. En el caso de los menores, estimamos que, debido a sus características, la protección debe ser superlativa. Por lo tanto, deben establecerse mecanismos específicos para los menores, que atiendan a sus características y que prioricen la protección de sus derechos.

También es necesario introducir como propuestas algunas reglas procesales especiales en el caso de los adolescentes en internación provisoria, que se refiere a la privación de libertad pendiente la investigación. Deben fijarse revisiones periódicas de carácter obligatorio, por ejemplo, cada 15 días, respecto de los menores que se encuentran en dicho estado. Debe haber una disminución de los plazos de investigación cuando se decreta esta medida cautelar, precisamente porque la apuesta es a priorizar el uso de recursos en la protección de los menores. Por lo tanto, esto es una exigencia mayor al Ministerio Público en la investigación de estos delitos.

Por último, en cuanto a las necesidades y al tiempo que requiere la condena, que también supone una diferencia relevante respecto de los adultos, cabe señalar lo siguiente. Como dije, debe haber una disminución de los plazos de investigación con ese objeto, y debe descontarse el tiempo de privación de libertad de todas las sanciones, puesto que si la pena no es privativa de libertad, el tiempo que el menor ha pasado privado de libertad no cuenta, lo que es un contrasentido porque esa situación es mucho más grave que el tiempo que pudiera pasar sujeto a otro tipo de sanción.

También se requiere evaluar si la ley de agenda corta es conveniente para los adolescentes. Jurídicamente hemos hecho intentos de argumentaciones en distintos

tribunales sobre el alcance de la agenda respecto de los menores, sin resultados uniformes. Por lo tanto, sería interesante poder regularlo de manera específica.

En cuanto al internamiento en régimen cerrado, se debiera restringir el uso del número 1 del artículo 23 sólo a los delitos gravísimos y no a los delitos graves reiterados, como una suma, porque la razón de establecer ese máximo se relaciona con la entidad del delito y no con el historial del menor. Por eso, estimamos importante hacer ese distingo, estableciendo en ese caso sólo los cinco años, y la aplicación del número 1 exclusivamente en caso de delitos gravísimos.

Para finalizar mi exposición, quiero señalar que a diferencia de lo que ocurre con la defensa de adultos, que generalmente se limita hasta la sanción -sin perjuicio de que luego existe una disposición de la defensoría a seguir en contacto con nuestros "condenados", por llamarlos así-, en el caso de los menores este trabajo no concluye con la sentencia. Muy por el contrario, el defensor realiza un trabajo muy relevante con posterioridad a la aplicación de la sanción. Este trabajo se relaciona con todos los mecanismos que la propia ley establece respecto de la revisión de las condenas. Expreso esto con mucha fuerza, ya que no sólo son mecanismos que están contemplados en la ley, sino que, además, generan muchas expectativas en los jóvenes y, por tanto, mucha exigencia hacia el defensor, con posterioridad a la aplicación de la sanción. Los menores están muy preocupados e interesados en lo que ocurre con posterioridad a ésta. Obviamente, sus requerimientos se sustentan en que se han portado bien y que han cumplido con las obligaciones. Por ello, esperan que, efectivamente, ese buen desarrollo en la aplicación de la sanción tenga como impacto o

consecuencia la posibilidad de que ésta sea reducida o cambiada. En ello también se produce un trabajo muy fuerte de los defensores juveniles, que supone una carga importante de trabajo para nuestros equipos.

La señora TURRES, doña Marisol (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.

El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señora Presidenta, más bien quiero hacer un comentario, ya que no escuché la exposición completa. Entiendo que dejarán un documento de la exposición en la Comisión.

Estoy convencido de que si la defensoría, como debió haber ocurrido desde su génesis, tuviese un estatuto jurídico similar al del Ministerio Público, nos habríamos ahorrado varios desaguisados legislativos en el último tiempo.

A mi juicio, no tenemos una institución que mire, desde el punto de vista de las garantías, con la fortaleza con que lo hace el Ministerio Público, que es el órgano persecutor. Hay varios proyectos e iniciativas en ese sentido -por cierto, es una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo-. Éste es un punto a considerar, ya que, según recuerdo, en el marco de la tramitación de la prórroga de la ley de responsabilidad penal adolescente, el defensor de la época fue reprendido severamente por haberse pronunciado en una Comisión -no en la Cámara de Diputados- en contra de la entrada en vigor de esa ley. Imagino que los argumentos habrán sido muy cercanos a los del comité de expertos. Entiendo que la defensoría era parte del comité de expertos; sin embargo, como órgano subordinado, jerarquizado y dependiente tuvo que callarse luego de haber hablado. Es un tema relevante que hay que tener presente.

Si tenemos una institución autónoma, como el Ministerio Público, que opera con independencia de los tres poderes del Estado, lo que le permite, precisamente, tener la fortaleza institucional y jurídica suficiente para llevar a cabo su misión, con plena prescindencia de consideraciones políticas desde el punto de vista de la persecución penal, deberíamos tener, también, desde el punto de vista de la defensoría penal, una institución que posea la misma jerarquía y nivel. Ése es otro debate, pero que se relaciona con el tema que estamos tratando hoy. Como señalé en la sesión anterior, a pesar del juicio distinto del ministro, que estimo que realiza un esfuerzo importante, pero los hechos históricos ya están allí, una de las conclusiones que me he ido formando es que esta ley entró en vigor más allá de las realidades concretas que teníamos para que todo el sistema institucional y administrativo pudiese ponerse en marcha.

El viernes fui invitado por los dirigentes de Antrase a visitar el CIP-CRC de La Serena. Les dije que, comparado con lo que vimos en San Bernardo, es un hotel de cinco estrellas, aunque entiendo que esta semana colapsaba. La única mujer que tienen -porque la casa destinada a mujeres ya está completa- se encuentra en la enfermería. Vale decir que si llegaba una mujer más ya estaban en dificultades. Obviamente, la segregación se ha relajado. Hay problemas con el personal; hubo una movilización que terminó, incluso, con un desalojo, que no es muy habitual en mi región en la sede regional del Sename.

Lo que quiero decir es que estamos trabajando. El ministro dijo que se ha trabajado mejor en la resolución de problemas con la ley en vigor que lo que se había trabajado sin la presión de tener la ley en marcha. Pero ésa es una cuestión con la que no se cuenta a la

hora de legislar. Decir: "Vamos a sacar esta ley más o menos, porque así lo haremos mejor", no es una consideración legislativa.

En el debate de la puesta en marcha de la ley no tuvimos, desde el punto de vista de la defensa penal, a alguien que velara por ese aspecto, sobre todo en una sociedad que crecientemente opta por el camino de la sanción más que por el de la protección y el de la defensa, ya sea por presiones mediáticas o por diversas razones que no son del caso señalar. Sé que en su momento la propia defensoría tenía la convicción de que la ley no estaba en condiciones de ponerse en marcha. Si hay un Ministerio Público, una fiscalía con ese nivel de autonomía y fortaleza institucional, al otro lado de la vereda también debería existir lo mismo.

La señora TURRES, doña Marisol (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Recondo.

El señor RECONDO.- Señora Presidenta, en la sesión anterior el ministro de Justicia nos hizo una exposición respecto del funcionamiento del sistema una vez que se puso en vigor la ley de responsabilidad penal juvenil. Había una diferencia muy importante entre los antecedentes que tuvo a la vista el Ministerio, a partir de estudios de demanda de las plazas que se iban a ocupar en el Sename, y la realidad que se verificó, fundamentalmente respecto de la internación provisoria. En este tema, el estudio arrojaba un estimado de 283 casos, pero se saltó a 934. Entonces, ahí surgió inmediatamente la duda de algunos diputados en cuanto a si este salto guardaba alguna relación con el comportamiento de tribunales, del Ministerio Público, que hacía esta diferencia tan importante entre lo que se estimaba y lo que fue finalmente la realidad.

Quiero que me señalen si han evaluado esa situación y por qué se ha dado básicamente este salto tan grande en materia de internación provisoria.

La señora VIAL (doña Paula).- En estos fenómenos siempre hay muchas causas; no obstante, tenemos algunas nociones de algunos factores que pudieron haber influido en ese aumento. Esto se relaciona con lo que señalé en mi exposición general, en la lógica de que debemos entender esta nueva justicia adolescente, especializada, como diferente a la de adultos y no como una justicia adulta atenuada.

Sólo por poner un ejemplo de algunas decisiones que tienen impacto en lo que usted señala, existe un instructivo del Ministerio Público, el oficio 511, que establece los criterios de actuación en el caso de la aplicación de la ley 20.084, que señala que los fiscales, como una instrucción, deberán instar por la internación provisoria en algunos casos, por ejemplo, cuando la conducta que se imputa al adolescente sea constitutiva de crimen, generalización que resulta sumamente compleja, porque depende de la determinación o tipificación que el Ministerio Público efectúe de la conducta realizada por el menor. En la práctica, eso significa que son muchas más las situaciones en que ese organismo debe obligatoriamente instar por la internación provisoria, que aquellas en que la aplicación especializada de la ley pudiera ser deseable, sobre la base del entendimiento de la lógica del adolescente, más allá de los resultados.

Por otra parte, para el fiscal es obligatorio instar por la internación provisoria cuando el adolescente ha incumplido alguna de las medidas cautelares establecidas en el párrafo 6º, del Título V del Código Procesal Penal. Por ejemplo, cuando existan

antecedentes que hagan presumir que el adolescente pudiera incumplir su obligación de permanecer en el lugar del juicio hasta su término y presentarse a los actos del procedimiento, como la ejecución de la sentencia o no asistiera a la audiencia del juicio oral. Es decir, es un factor no sólo genérico, sino, además, de menor relevancia en términos de seguridad y delincuencia, porque sólo tiene que ver con un factor geográfico y procesal, cual es que si el menor se va o no a presentar ante el tribunal, lo que obviamente impacta en la cantidad de menores que pueden ser puestos en internación provisoria.

Aun cuando me hago cargo de que no corresponde establecer una única responsabilidad, se puede vislumbrar que las políticas criminales y de persecución no necesariamente han considerado las diferencias que existen con los menores. Por lo tanto, se incrementan las posibilidades de que efectivamente exista sobreabundancia en materia de solicitud y disposición de la internación provisoria.

Se debería entender la lógica del adolescente, puesto que el establecimiento de reglas como las planteadas, que son más propias de la justicia de adultos, tiene un impacto en la realidad.

Al inicio señalé que, en términos porcentuales, no hemos tenido un aumento de menores atendidos, pese a que ha habido un incremento en el tramo correspondiente al 25 por ciento, entre 14 y 16 años.

La señora TURRES, doña Marisol (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín.

El señor VALLESPÍN.- Señora Presidenta, pido disculpas por el atraso, pues estaba en otra actividad. Lo señalo por si lo que voy a preguntar fue abordado por

nuestra invitada durante su presentación. En todo caso, después leeré el acta, para que no perdamos tiempo.

Del caso puntual ocurrido en Puerto Montt, hemos derivado a un análisis más global, referido a la aplicación de la ley. Al respecto, ¿qué aspectos positivos, como Defensoría, podrían destacar de la implementación de esa normativa? Insisto, si mi consulta fue abordada en su presentación, no me la responda.

Me parece importante ese aspecto, porque se ha afirmado que la aplicación de la ley y de los procedimientos pertinentes estaba más bien enfocada hacia los adultos y que era inadecuada para los jóvenes, de manera que no era lo que Chile requería. En la implementación hemos visto una serie de situaciones complicadas. De hecho, fui uno de los pocos que no votó a favor de la puesta en marcha de la ley en la fecha determinada, pues quería que se postergara. Sin embargo, desde su perspectiva, me gustaría saber cuáles son los aspectos positivos de su implementación.

La señora TURRES, doña Marisol (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada María Antonieta Saa.

La señora SAA (doña María Antonieta).- Señora Presidenta, también pido disculpas por no estar presente algunos momentos en la sesión.

Me parece muy interesante lo que se ha planteado, porque una de las preocupaciones que compartimos con los colegas es el tema de la internación provisoria. En la visita que efectuamos a los centros del Sename, encontramos una gran cantidad de niños a los que se había aplicado esa medida. Me parecen muy interesantes las propuestas en el ámbito procesal. Sin embargo, creo que en Chile aún no logramos un nivel de conciencia respecto de lo que significan las distintas edades y los

desarrollos psicológicos. Por consiguiente, tendemos a ser mucho más rigurosos con los niños que con los adultos. La sociedad se ha transformado y se ha desarrollado un ámbito de efervescencia que destaca en forma notoria a los adolescentes.

No sé si han conocido el ejemplo de Brasil, que tiene una justicia instantánea, particularmente en los estados de Santa Catarina y Porto Alegre, que considera las características psicológicas de la edad para los castigos y la aplicación de justicia.

Al respecto, quiero saber si las propuestas que han planteado se las han dado a conocer al Ministerio o lo han hecho sólo en el Congreso Nacional, a fin de que se asuman las reformas procesales, las cuales, a mi juicio, son importantes de implementar.

La señora TURRES, doña Marisol (Presidenta).- Tengo varias consultas bien puntuales.

La exposición fue bastante clara, en términos de la capacitación y del funcionamiento de la Defensoría Penal Pública, pero quiero que me aclaren si sólo abogados integrantes de la Defensoría se encargan de la defensa de los menores, porque a partir de la exposición, deduzco que también la hacen los abogados que están dentro de la licitación y los otros que no son especializados y que igualmente fueron capacitados, pero que básicamente la realizan los 42 señalados.

Para nosotros es importante conocer el sistema de control que se utiliza, con el objeto de determinar de qué manera los están cumpliendo.

Nuestra Comisión visitó un par de centros del Sename bastante poblados, como los de Limache y de San Bernardo, donde había menores que llevaban tres, cinco y seis meses privados de libertad. Uno de ellos nos dijo:

"He visto una vez a mi defensor." Otro nos comentó: "He visto dos veces a mi defensor." No tenían idea de su situación procesal ni de lo que se estaba haciendo al respecto. Esa sensación de desprotección e indefensión no la considero menor, de manera que como sociedad debemos dar señales importantes en ese sentido, lo que forma parte de uno de los objetivos de la ley, a fin de que los menores sientan que tienen un grado de responsabilidad en los delitos que cometen. De hecho, la Defensoría Penal Pública fue creada para que cada imputado tuviera contacto directo con su defensor, cosa que no ocurría en los dos centros que visitamos. A lo mejor, justo los abogados asignados a esos recintos no van mucho; no lo sé. Pero, reitero, quiero que me señalen cuáles son los mecanismos de control de la función de los abogados.

Por otro lado, es importante poner los puntos sobre las íes respecto de la labor de la defensoría, con el objeto de que se resguarde el debido proceso y que se apliquen las sanciones justas. Sin embargo, concuerdo con el diagnóstico de que hay muchos menores privados de libertad durante un tiempo equis, en circunstancias de que, a la hora de ser condenados, sus sanciones no serán privativas de libertad. En consecuencia, parece un contrasentido tener, por ejemplo, a un menor privado de libertad dos meses cuando finalmente va a salir en libertad.

Creo que en esa situación cada uno tiene su rol. Tal vez, la función del Ministerio Público sea que los menores permanezcan privados de libertad. En todo caso, nuestra intención no es cuestionar su labor.

Hemos invitado a las próximas sesiones a integrantes del Poder Judicial, para expresarles nuestra preocupación por el largo período de privación de libertad que sufren los jóvenes durante el proceso

judicial y la posterior sanción que determina un plazo menor de encierro. El objetivo de la Comisión es abocarse al estudio de cómo se ha implementado la ley, sin perjuicio de que se puede estar de acuerdo o no con la forma de operar del Ministerio Público y con las decisiones del Poder Judicial, que es un poder autónomo, que debe tener en consideración tanto el punto de vista de los fiscales del Ministerio Público como de los defensores de la Defensoría Penal Pública.

El debate nos lleva a temas sobre los que no nos corresponde pronunciarnos, debido a la autonomía de los poderes del Estado. Podemos sugerir modificaciones a la ley y analizar de qué manera se implementa mejor, pero no podemos cuestionar el trabajo del Ministerio Público, porque ese organismo también podría reclamar que los defensores tratan de dejar a los muchachos en libertad. Ese diálogo no nos lleva por un buen camino, porque lo que queremos, en definitiva, es que la ley se aplique lo mejor posible y que exista una oportunidad que hoy no se les da a los menores infractores de la ley.

Quiero saber si elaboran estadísticas sobre el promedio de tiempo que permanecen privados de libertad los menores. Sería bueno que ese dato estuviese desglosado por regiones, para tener un elemento de juicio sobre cómo está resolviendo el Poder Judicial esos casos. Asimismo, en algún momento también se habló de la reorientación de la ley.

La señora VIAL (doña Paula).- Señora Presidenta, tenemos mecanismos de control y por eso es tan importante el tipo de sujeto. Los defensores realizan sus visitas como mínimo cada quince días y son, además, apoyados por asistentes sociales. No puedo entrar a discutir respecto de lo que los menores afirmaron durante la visita que efectuó la Comisión a dos centros del

Sename, pero quiero aclarar que permanentemente atendemos reclamos de los menores que señalan que no han recibido visitas de sus defensores, en circunstancias de que en la práctica eso no es efectivo. Se trata de una discusión barroca, que no tiene ningún sentido.

Reitero, tenemos sistemas de control y los menores son visitados permanentemente. Sin embargo, los jóvenes quieren que los defensores los visiten casi a diario, lo que es imposible por razones de carga de trabajo. Los defensores cumplen con su obligación, se les controla casi semanalmente, puesto que tenemos un sistema informático que nos permite hacerlo, además de los controles internos que se efectúan en cada defensoría regional.

En relación con la crítica que formulé, ésta respondió a una pregunta que me realizó un diputado sobre cuáles son las razones para un aumento de las expectativas en relación con la internación provisoria. Estamos trabajando para que la defensa sea mejor, pues ese aspecto constituye un elemento relevante.

La señora TURRES, doña Marisol (Presidenta).- Lamentablemente, nos quedaron muchas consultas por formular a nuestros invitados, de modo que quiero consultar si usted o su asesor tendrían la posibilidad de concurrir a la próxima sesión. Sería muy importante que lo pudieran hacer, porque contaremos con la presencia de representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial, de manera que sería la ocasión para hacer propuestas al respecto.

La señora SAA (doña María Antonieta).- Señora Presidenta, los diputados tenemos la misión de supervisar la aplicación de la ley, de modo que podemos formular críticas a los otros poderes del Estado, porque nos

interesa que las cosas marchen bien. No comparto su postura en el sentido planteado, razón por la que pido que la señora Paula Vial sea nuevamente invitada a la Comisión.

La señora TURRES, doña Marisol (Presidenta).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

-Se levantó la sesión a las 12.25 horas.